

Ruth Stanley

Los niños ante la ley: juventud y justicia penal en América Latina

1. Los derechos humanos en la política internacional

Desde la perspectiva del siglo XXI resulta difícil recordar el hecho de que, hasta la segunda mitad del siglo pasado, los derechos humanos casi no fueron tema de la política internacional. Los Estados, y no los individuos, constituyen el sujeto clásico del derecho internacional, y una construcción estricta del concepto de la soberanía estatal no permite siquiera un tímido *droit de regard*, el derecho a mirar cómo un Estado trata a sus propios ciudadanos. Las experiencias de los años treinta y, sobre todo, la política inhumana del régimen nazi, cambiaron esa actitud de no-interferencia absoluta: la Carta de las Naciones Unidas establece la protección de los derechos humanos como una de las metas de la nueva organización. Sin embargo, la Carta no especifica cuáles son los derechos a proteger. Un paso importante en el camino hacia la creación de un régimen internacional de protección de los derechos humanos fue la aprobación, en diciembre de 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese documento fundacional enumera los derechos humanos cuya protección representa un estándar común, entre los que se incluyen no sólo los derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales y culturales, y hasta el germen de los llamados “derechos de la tercera generación”, o sea, derechos que se reclaman ante la comunidad mundial de Estados.

La Declaración Universal fue concebida sólo como un paso previo a la aprobación de un instrumento legal que otorgaría a todos los derechos allí nombrados el carácter de obligación legal de los Estados parte. Como es harto sabido, y debido en parte a la competencia ideológica de la Guerra Fría pero también a los recelos más profundos de los Estados con respecto a cualquier restricción de la soberanía, el segundo paso no se dio hasta el año 1966. La concepción opuesta de los derechos humanos entre el mundo occidental por un lado y

la Unión Soviética y sus aliados por otro, se reflejó en la aprobación de dos textos distintos: el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pese a que, de ese modo, fue posible adscribirse a un régimen de protección *à la carte*, tuvieron que pasar otros diez años más hasta que entraron en vigor los dos tratados después de que cada uno fuera ratificado por el número mínimo de 35 Estados.

Desde este comienzo tímido, el régimen internacional de derechos humanos se ha desarrollado de una forma impresionante y hoy día constituye un tema central de la política internacional. En las décadas que siguieron a la entrada en vigor de los dos grandes pactos, otros tratados han protegido también derechos o grupos específicos, como la Convención contra la Tortura, la Convención para Eliminar toda Forma de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Algunos de esos instrumentos prevén, en protocolos adicionales, el derecho individual de petición, con lo cual las personas cuyas derechos han sido violados pueden dirigirse a las Naciones Unidas en contra de sus propios gobiernos. Al mismo tiempo, y también desde un comienzo tibio, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha desarrollado una serie de instrumentos para monitorear la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la actividad tanto de las Naciones Unidas como de organismos regionales en esta área no significa necesariamente un mejoramiento en la situación de los individuos cuyos derechos se quieren proteger.

Este artículo se propone analizar en qué medida la Convención sobre los Derechos del Niño ha mejorado su situación real, otorgándoles de hecho el carácter de sujetos de la ley. El análisis demuestra la escasa efectividad de la Convención en cuanto a los derechos de los niños más desprotegidos, y se pregunta por qué ésta no ha podido modificar sustancialmente la situación de los jóvenes vulnerables. Eso nos remite a la cuestión más amplia de los mecanismos a través de los cuales los tratados internacionales sobre derechos humanos deberían provocar un impacto significativo dentro de los Estados.

2. Los niños como sujetos de la ley

Los esfuerzos a nivel internacional tendientes a alcanzar un sistema internacional de protección de los derechos del niño tienen una larga historia. La comunidad internacional se ocupó ya de los derechos del niño en los años veinte del siglo pasado con la Declaración de los Derechos del Niño del año 1924 (Declaración de Ginebra), aprobada por la Liga de Naciones en una época en la que los derechos humanos eran considerados un asunto interno de los Estados. En los años posteriores a la Declaración de Ginebra, la responsabilidad especial de los Estados con respecto a los niños fue constatada reiteradamente, por ejemplo en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, en la Declaración sobre los Derechos del Niño de 1959, en el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos así como en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ambos aprobados por la Asamblea General de la ONU en 1966) y las Reglas de Beijing para la administración de la justicia de menores (Naciones Unidas 1985). En 1989, la Asamblea General aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño (CIDN) convirtiéndolos en sujetos del derecho internacional. Después de haber sido ratificada por veinte Estados, esa convención entró en vigor nueve meses después. En comparación con los diez años que tuvieron que transcurrir entre la aprobación (1966) y la entrada en vigencia (1976) de los dos grandes acuerdos sobre derechos humanos o –para tomar como ejemplo un caso más reciente– los dos años y medio entre la aprobación y la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura (1984/1987), la forma expeditiva de la CIDN parece evidenciar un grado inusualmente alto de consenso entre los Estados acerca de la necesidad de proteger los derechos de los más vulnerables.

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que “la dignidad intrínseca y [...] los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” tienen vigencia también respecto a los niños, pero estipula también que “la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales” (CIDN, Preámbulo). Así, según la Convención, los niños son tanto sujetos de derecho como también objetos de cuidado y asistencia. Para los efectos de la Convención, “niño” es “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría

de edad” (CIDN, Art. 1). Los derechos del niño consagrados en la Convención reflejan, por un lado, los estándares internacionales en la protección de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales —es decir que extiende al niño los derechos de que gozan las personas adultas—. En ese sentido, la CIDN representa un paso significativo, ya que rompe con la división entre derechos civiles y políticos por un lado y derechos económicos, sociales y culturales por otro, y por primera vez desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, reúne a todas esas categorías de derechos en un solo instrumento.¹ Por otro lado, se reconocen en la Convención derechos que reflejan la situación y las necesidades específicas de los niños: el derecho a la familia, el derecho a un tratamiento especial por la justicia penal, la protección de los niños en conflictos armados, etc. La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada por todos los Estados del mundo excepto uno: los Estados Unidos de América. De este modo, la CIDN constituye el tratado internacional de derechos humanos que cuenta con el mayor grado de adhesión (Schellinski 1998: 140), poniendo así de relieve que la protección de los derechos del niño se ha convertido en una norma vigente en casi todo el mundo.

En muchos países de América Latina, la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se efectuó en el marco de la transición a la democracia. La discusión sobre las formas de entender y tratar a la infancia encarada tradicionalmente desde una perspectiva asistencialista y tutelar ha cedido lugar a una visión en términos de ciudadanía y derechos, que refleja y forma parte del discurso más amplio sobre los derechos de ciudadanía en la democracia (Beloff 1997). Así, la doctrina acerca de la “situación irregular”, producto de una concepción de los jóvenes como objeto de tutela y represión, ha sido sustituida por la de protección integral, que considera a niños y jóvenes como sujetos plenos de derecho.

Este trabajo no intenta examinar la medida en que todos y cada uno de los derechos establecidos en la Convención están o no efectivamente garantizados, aspecto que exigiría mucho más espacio que el disponible. En su lugar, el análisis se centra en el tratamiento dado a los niños y los jóvenes por la justicia penal. Este enfoque nos parece válido debido a que en esa esfera se ven afectados los derechos políti-

1 García Méndez (2001); Méndez (2001: 264).

cos y civiles más fundamentales de las personas, como el derecho a la vida, el derecho a no ser maltratado ni torturado, el derecho a un juicio justo etc., así como el derecho del niño a gozar de una protección especial por su vulnerabilidad a pesar de su carácter de sujeto de la ley. Como se verá más adelante, ni el carácter de sujeto de la ley ni la protección especial están garantizados en la triste realidad de los niños y jóvenes que se encuentran involucrados en el sistema penal del Estado; ellos se convierten antes que nadie en las víctimas de una represión brutal y arbitraria. Los jóvenes víctimas de la represión del sistema penal provienen –al igual que las demás víctimas– de los estratos más desprotegidos de la sociedad. Así, aunque no se van a tratar aquí explícitamente los derechos sociales y económicos y su escasa o nula incidencia en la realidad, su falta manifiesta forma la base de la violación de los derechos civiles y de protección. Así, en el tratamiento impuesto por el sistema penal a los niños y jóvenes se expresan y concentran de manera drástica los efectos de la ciudadanía de baja intensidad (O'Donnell 1997). La evidencia empírica se refiere a la Argentina, Brasil y Venezuela. La concentración en un número reducido de países persigue tanto el objetivo de presentar datos suficientemente pormenorizados que faciliten un análisis serio como asimismo mostrar que los fenómenos descritos no son propios de un solo país, sino que representan una pauta típica del tratamiento que los sistemas penales de América Latina dan a los niños.

3. Los derechos del niño frente al sistema penal según la Convención

La CIDN concibe al niño/adolescente como sujeto de derechos y obligaciones; como tal, éste debe gozar de las mismas garantías que los adultos; por su condición de joven, debe gozar además de otras garantías que le corresponden por su edad. Por eso, la Convención plantea un nuevo modelo de justicia penal especial para niños y jóvenes. Más específicamente, estipula en su artículo 37:

- a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
- b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a

cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;

- c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos [...];
- d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción (CIDN, Art. 37).

En el artículo 40 de la CIDN se reconoce el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haberlas infringido a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover su reintegración y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. Con este fin, se garantizan a los niños, como estándar mínimo, las garantías procesales inherentes al Estado de derecho, como la presunción de inocencia, el derecho del niño a ser informado de los cargos que pesan contra él; asistencia jurídica (u otra apropiada) en la preparación de su defensa; que la causa se dirima sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial; el derecho a negarse a testimoniar o auto-incriminarse; el derecho a interrogar o hacer que se interroge a testigos de cargo, y la doble instancia. Así, se le garantiza al niño los derechos de cualquier imputado por la justicia penal. Pero además el artículo 40 le reconoce al niño la necesidad de una protección especial:

- 3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:
 - a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;
 - b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales,

en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción (CIDN, Art. 40).

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño acaba entonces con el viejo sistema tutelar cuyos características eran:

- la falta de respeto por las garantías del derecho penal;
- confundir cuestiones penales con cuestiones sociales, tratando como problemas de la justicia penal la situación de niños y adolescentes pobres;
- la negación del carácter de ciudadanos de los niños;
- una concepción de los menores como objeto de protección;
- la criminalización de las conductas de supervivencia de los jóvenes pertenecientes a los sectores sociales de menores recursos;
- la centralización de discrecionalidad en el juez, que ejerce la patria potestad como control estatal en lugar del familiar, mezclando funciones jurisdiccionales con funciones de control y asistencia social.

El paradigma proteccionista o tutelar, basado en la doctrina de la “situación irregular”, consideró a los niños y adolescentes como inmaduros, atribuyéndoles incapacidad para actuar así como incapacidad cognitiva. La supuesta incapacidad del menor fue la razón para convertirlo en objeto de protección, excluyéndolo del sistema penal y, por lo tanto, negándole las garantías sustantivas y procesales. En cambio, la CIDN parte del niño y adolescente como sujeto de derechos y obligaciones; como tales, los niños gozan de las mismas garantías que los adultos, además de algunas que les corresponden por su condición de niños. Por eso, la CIDN plantea un modelo de justicia penal especial para niños y adolescentes, y estipula que se les aplicarán medidas sólo cuando incurran en la comisión de un delito y no por la situación de riesgo en que se encuentren. La nueva doctrina de la protección integral refuerza la posición legal de los niños al mismo tiempo que limita

la intervención de la justicia; les asegura el principio de igualdad ante la ley y les concede las mismas garantías que a los adultos; vincula la privación de libertad y la institucionalización únicamente a la comisión de delitos, y considera a los niños como personas capaces jurídicamente. Sus estipulaciones ponen fin al paradigma proteccionista que sirvió para criminalizar la pobreza, legitimando el tratamiento discriminatorio otorgado a los niños perjudicados en el aspecto social.

4. La no adecuación de la legislación nacional: los casos de Argentina y Venezuela

A pesar de que la CIDN entró en vigencia hace más de una década, muchos países de la región todavía no han adecuado su legislación a los principios de la Convención. Así, los viejos códigos de menores basados en la ideología tutelar siguen vigentes. Tal es el caso de la Argentina, pese a que ciertos tratados internacionales sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional (Constitución de la República Argentina, Art. 75, inciso 22), entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño.² Sin embargo, y a pesar de que se han presentado diversos intentos de reforma legislativa en los últimos años, el tratamiento de los niños y adolescentes continúa siendo regulado por la ley de patronato de menores (Ley Agote), dictada en 1919, lo cual significa que bajo el pretendido ejercicio de un rol tutelar, el Estado ha actuado y sigue actuando con gran discrecionalidad sobre los jóvenes. El régimen vigente se caracteriza por dejar a los jóvenes en una situación de indefensión, por lo cual pueden quedar internados y privados de su libertad en institutos de corrección sin juicio y sin derecho de defensa. Los niños privados de libertad son en su gran mayoría, como los presos en general, gente perteneciente a los estratos más bajos de la sociedad, de modo que la tutela estatal resulta, de hecho, en una criminalización de la pobreza. Por falta de sitios en instituciones de menores, muchos niños privados de libertad sin juicio están internados en las comisarias policiales, donde son sometidos a malos tratos y torturas (Giarone 2000). En los últimos años, el discurso de la “mano dura” contra la criminalidad ha ido acompañado por un incremento de los casos de tortura por parte de la policía (Verbitsky 2001). Tras varias

2 Beloff (1997); Bidart Campos (1997).

denuncias de maltratos y torturas de niños alojados en comisarias, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires denunció reiteradamente en los años 2000 y 2001 la irregularidad del alojamiento de niños en comisarias, los procedimientos degradantes, la tortura y el hacinamiento.³ Según las denuncias, la tortura también es una práctica común en los institutos asistenciales (Verbitsky 2000).

La ideología tutelar de “proteger del riesgo moral y físico a los menores” (en las palabras del entonces comisario general de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Verón), se expresó claramente en la orden de la Policía de la Provincia de Buenos Aires del 6 de agosto de 2001 indicando “amplios operativos con el fin de poner a disposición de la justicia de menores a los niños y jóvenes que se encuentran desprotegidos en la vía pública y/o pidiendo limosna, acción que ya se ha tornado sistemática y pone en riesgo la integridad de los menores” (*Clarín*, 01.09.2001); según la orden, los operativos “deberán implementarse en forma continua y en caso de que menores sean reincidentes deberán ponerse a disposición de la justicia tantas veces como sea necesario” (Alarcón 2001a). Tras una ola de denuncias, la polémica orden fue suspendida un mes más tarde (Alarcón 2001b). La doctrina tutelar que prevé la detención de los niños –supuestamente para su propia protección– puede coexistir con una actitud punitiva que rechaza abiertamente los principios de la CIDN. Así, de acuerdo con una cita, un jefe policial del conurbano bonaerense se habría expresado con estas palabras: “Un menor debe cumplir una pena como un mayor [...] Su familia tiene que sufrir por ese hijo preso y el chico tiene que sufrir al estar preso. Si no, no les cuesta salir a robar y a matar. Es todo gratis y así no puede ser” (*Clarín*, 30.04.2002).⁴ Las palabras del comisario contradicen no sólo la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también la Constitución Argentina, que dispone en su artículo 18 que “las cárceles de la Nación serán [...] para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, pero concuerdan con una actitud que ve a los jóvenes pobres como delincuen-

3 *Clarín* (31.05.2001); *Clarín* (31.08.2001).

4 En el sistema tutelar que rige en la Argentina, en la delincuencia de los adolescentes ya no es “todo gratis”, pues un joven de 16 a 18 años no es impune si comete un homicidio o un robo, sino que es sometido a juicio penal por un juez de menores pero con mecanismos que le proveen menos garantías que a un adulto.

tes peligrosos y los culpabiliza de ser responsables de un creciente número de crímenes violentos.

La actitud punitiva se expresa también en la demanda por reducir a 14 años la edad máxima de inimputabilidad, apoyada tanto por la policía como por amplios sectores de la población: según una encuesta publicada por el diario *La Nación* (17.06.2002), siete de cada diez personas consultadas están de acuerdo en que se debe bajar de 16 a 14 años el límite de edad para responsabilizar penalmente a menores que cometen delitos. Al analizar los resultados del sondeo, se concluye que los ciudadanos de clase alta y media alta, aquellos que se encuentran dentro de la franja entre 30 y 54 años, los que cuentan con estudios secundarios completos y las amas de casa, encabezan el apoyo al endurecimiento de la ley contra los jóvenes que delinquen, mientras que entre los estudiantes, los jubilados y los ciudadanos de clase media baja y baja, se ubican los mayores niveles de resistencia a esta reforma, que ya tiene expresión parlamentaria en el proyecto de ley redactado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Vannossi, el cual fue enviado al Congreso en abril de 2002. El proyecto de bajar la edad de responsabilidad penal sin adecuar la legislación nacional a la Convención sobre los Derechos del Niño dejará a los jóvenes infractores de la ley —o sospechosos de serlo— en una situación de indefensión, atribuyéndoles la imputabilidad penal sin garantizarles los derechos de un adulto.

Tampoco en Venezuela la legislación nacional ha sido adecuada a las estipulaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, a pesar de que el gobierno venezolano tuvo un papel importante en la preparación de la CIDN y la ratificó ya el 13 de septiembre de 1990. La Ley Tutelar de Menores venezolana fue promulgada el 27 de noviembre de 1980, con anterioridad a la Convención y refleja claramente el paradigma tutelar superado en la CIDN. Así, en el sistema legal venezolano, el menor no puede ser considerado como sujeto del derecho penal, y si un menor de dieciocho años comete un delito debe ser remitido al procedimiento especial que prevé la Ley Tutelar de Menores. Así, el “menor infractor” no goza de los derechos y garantías procesales vigentes para las personas adultas; más bien se “somete al arbitrio subjetivo de un juez, facultado para decidir de manera semi-omnipotente, sobre su destino inmediato y futuro, a través de la aplicación de un procedimiento unicompreensivo” (Morales et al. 1998:

88). Entre otras deficiencias, la Ley Tutelar de Menores permite que se celebren audiencias en las que sólo estén presentes el juez y el procesado, privando así al niño de la representación y la defensa de un abogado. También permite que las autoridades mantengan detenido a un menor durante un período ilimitado y discrecional, que con frecuencia dura hasta tres meses (Amnistía Internacional 1997: 4). La corrupción policial es un factor que contribuye al número de chicos detenidos: la puesta en libertad de un niño detenido puede costar hasta US\$ 300 (ibídem: 4).

Los datos disponibles sobre los niños y adolescentes venezolanos privados de libertad revelan que provienen de los estratos socioeconómicos más bajos de la sociedad, que no tienen el nivel escolar correspondiente a su edad y que suelen provenir de familias incompletas donde uno de los progenitores está ausente (por lo general el padre, del que en muchos casos no se sabe nada) (Morales et al. 1998: 108, pássim). En lugar de ofrecerles perspectivas de reintegración social a través de programas de educación y asistencia social, la reclusión sirve para subrayar su carácter de excluidos de la sociedad. Según Amnistía Internacional, es frecuente que los jóvenes permanezcan detenidos junto con los adultos en las comisarías de policía, debido a la falta de espacio en los centros de detención para menores mantenidos por el Instituto Nacional del Menor. Tampoco los centros de reclusión para niños ofrecen un tratamiento satisfactorio: malos tratos, palizas y torturas son comunes y Amnistía Internacional encontró a “decenas de niños de incluso 12 años que llegaban a vivir hasta dos meses en condiciones degradantes que incluían la ausencia de agua, de higiene y de comida adecuada, así como la imposibilidad de obtener acceso a atención médica o jurídica” (Amnistía Internacional 1997: 5).

5. Legislación adecuada como letra muerta: el caso de Brasil

La falta de adecuación de la legislación nacional a la Convención sobre los Derechos del Niño puede ser vista como un obstáculo a la aplicación de la nueva doctrina de protección integral de los niños. Indica, de todas formas, cierta indiferencia frente al problema del tratamiento de niños y adolescentes por el sistema penal. Pero creer, en el caso contrario, que la adecuación de la legislación interna, como ha sucedido en el Brasil con el Estatuto del Niño y el Adolescente, ya de por

sí garantiza los derechos del niño, sería caer en una trampa. En la práctica, y a pesar de la correspondencia entre las disposiciones internacionales y la legislación nacional, los niños pobres brasileños que se encuentran involucrados en el sistema penal no parecen gozar de una mejor protección de sus derechos que los niños de otros países de América Latina donde esta adecuación todavía no se ha realizado.

El Estatuto del Niño y del Adolescente (Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA), Ley 8.069, aprobada el 13 de julio de 1990, ajusta la legislación brasileña sobre niños a las normas internacionales. Su premisa básica es que los adolescentes están en una etapa de desarrollo personal y que los que infringen la ley merecen una atención especial a fin de reintegrarlos en la sociedad, como está previsto en la CIDN (Art. 37). Ya la Constitución Federal de Brasil anticipó la Convención sobre los Derechos del Niño al enunciar la doctrina de protección integral en lugar del paradigma tutelar (Art. 227). De acuerdo con las premisas básicas del paradigma de protección integral, la privación de la libertad es concebida como el último recurso hacia el niño infractor, y debe ser acompañada por medidas educativas.

Una investigación cuantitativa (Volpi/Costa Saraiva 1998) sobre los adolescentes privados de libertad revela una realidad muy distinta. En la misma se destacan algunos elementos centrales. En primer lugar, se nota un aumento tanto en el número absoluto de niños y adolescentes privados de libertad como también una tasa creciente de jóvenes en esas condiciones (ibídem: 42). En el marco de un estudio cuantitativo no existe la posibilidad de averiguar a ciencia cierta las razones por las cuales los jueces de menores aplican la privación de libertad con frecuencia creciente. Los autores hacen referencia a varias explicaciones posibles, entre ellas fallas en las medidas alternativas a la privación de libertad y la presión ejercida por los medios de comunicación y las elites socioeconómicas a favor de la aplicación de medidas más severas. Cabe destacar que de las infracciones cometidas por jóvenes y que resultan en la privación de su libertad, los datos del año 1995 revelan que el 78% de las infracciones eran delitos contra la propiedad y el 22% delitos contra las personas (homicidio, lesiones, etc.), mientras que en 1997, un 76% de los delitos que resultaron en privación de libertad eran delitos contra la propiedad y un 24% crímenes contra las personas. El leve aumento en el porcentaje de crímenes contra las personas no guarda relación con el número creciente de jóvenes priva-

dos de libertad, que aumentó en un 100% en el mismo período (ibídem: 43, 71).

En cuanto a las medidas socioeducativas que reciben los jóvenes privados de libertad, al menos el 29% de los internados no recibe educación alguna y el 21% de las unidades de reclusión de adolescentes no poseen una escuela con reconocimiento formal (ibídem: 55, 59). Cabe recordar que según el artículo 40 (1) de la Convención sobre los Derechos del Niño, el joven infractor tiene derecho a ser tratado teniendo en cuenta “la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”. La reinserción social del niño infractor depende en gran medida de su capacidad de incorporarse en el mercado de trabajo para garantizar su propia supervivencia al abandonar la institución. La falta de ofertas educativas con capacidad de aportarle al niño alternativas de convivencia social coherentes con las normas establecidas, cuestiona el carácter de la privación de libertad como medida socio-educativa (ibídem: 58, *pássim*).

Finalmente, cabe mencionar que los niños privados de libertad provienen, en su enorme mayoría, de los estratos socioeconómicos más bajos. Las limitaciones de un estudio cuantitativo no permiten a los autores averiguar si este hecho se debe a una más alta proclividad de los jóvenes pobres a delinquir o a la naturaleza clasista de la justicia en Brasil. Los autores del estudio relatan un caso que indica que los más privilegiados pueden beneficiarse de una actitud mucho más tolerante, incluso en relación con crímenes muy graves:

El caso conocido de adolescentes de Brasilia que asesinaron a un indio, quemándolo con alcohol cuando dormía en una parada de autobús en el centro de la ciudad, es ejemplar para ilustrar este contexto sombrío de la justicia. El adolescente, privado de libertad por la Justicia de la Infancia y la Juventud, tuvo su sentencia corregida por el Tribunal de Justicia, siendo puesto en libertad no por sus méritos, sino como resultado de las presiones internas del sistema, por ser uno de los involucrados el hijo de un magistrado (ibídem: 76).

Por otra parte, el carácter clasista de la justicia en América Latina ha sido documentado por otros estudios (Méndez/O'Donnell/Pinheiro 1999).

Los datos cuantitativos del estudio de Volpi y Costa Saraiva indican que la situación de los jóvenes privados de libertad en Brasil está lejos de corresponder con las estipulaciones de la Convención sobre

los Derechos del Niño y del propio Estatuto del Niño y Adolescente. La realidad de las unidades de reclusión de jóvenes también fue descrita y analizada en una investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional sobre los centros de reclusión de menores en San Pablo (Amnistía Internacional 2000). Según los datos de Volpi y Costa Saraiva, de todos los niños privados de libertad en el país, San Pablo representa un porcentaje muy significativo: más de la mitad de todos los niños sentenciados del país y casi la tercera parte de los niños internados provisionalmente están recluidos en centros de detención del estado de San Pablo (Volpi/Costa Saraiva 1998: 39-41). Por otra parte, otras investigaciones anteriores ofrecen un panorama general de las violaciones de los derechos humanos que sufren los reclusos, tanto adultos como menores de edad, en todo Brasil (Amnistía Internacional 1999; Human Rights Watch 1994). Además de ofrecer una descripción más pormenorizada de la realidad cotidiana de los centros de detención que complementa el estudio cuantitativo sobre el país entero, el informe de Amnistía Internacional, a diferencia del estudio de Volpi y Costa Saraiva, no se basa en datos suministrados por los propios centros de reclusión, sino en observaciones personales y entrevistas tanto con los jóvenes recluidos como con el personal de los centros.

En el estado de San Pablo, la Ley 185 de 1973 y el decreto 8.777 de 1976 delegaron en la Fundación Estatal para el Bienestar del Menor (Fundação do Bem-Estar do Menor, FEBEM) la responsabilidad de planificar y aplicar los programas de detención de delincuentes menores de edad. La Secretaría de Asistencia y Desarrollo Social (Secretaria de Asistencia e Desenvolvimento Social) es responsable de supervisar a la FEBEM. Amnistía Internacional describe “una cultura de torturas, malos tratos y castigos arbitrarios” en los centros de reclusión, atribuible a la falta de formación y apoyo adecuados para el personal de la FEBEM y a su déficit crónico de personal:

[...] los castigos son arbitrarios, y a menudo están concebidos para humillar. Los castigos colectivos son muy frecuentes: si un muchacho infringe una regla, se castiga a muchos [...] Algunos de los castigos que se aplican son [...] permanecer cara a la pared con las manos en la nuca por períodos que pueden llegar a un día; permanecer apoyado con la frente contra un muro, las manos a la espalda y los pies separados un metro, en ocasiones durante varias horas (este castigo provoca un gran malestar, mareos y, en algunos casos, desvanecimientos); dar vueltas al patio arras-

trándose sobre las nalgas y dar vueltas en círculos con una mano en el suelo. Los adolescentes son golpeados con frecuencia, a menudo por la noche. Algunos monitores tienen barras de hierro y palos almacenados para este fin. Tras las palizas, los obligan a ducharse con agua fría para disimular los hematomas. Ha habido adolescentes castigados por “infracciones” como hablar entre sí durante periodos de silencio (por ejemplo en el transcurso y después de las comidas y después de apagarse las luces) y moverse mientras ven la televisión (deben permanecer sentados sobre sus manos en absoluto silencio viendo el mismo canal de televisión durante horas). También es habitual que los guardias los humillen con insultos relativos a su condición de marginales o a sus madres (Amnistía Internacional 2000: 5).

Las condiciones de hacinamiento, resultado como se ha visto arriba de una creciente tendencia a privar a los jóvenes de su libertad en lugar de aplicar otras medidas, agudizan los problemas en los centros de reclusión; en julio de 1999 el centro de Tatuapé, diseñado para 800 reclusos, albergaba a 1.460, mientras que el centro de Inmigrantes albergaba a 1.648 jóvenes en un complejo con capacidad para 364. El hacinamiento llegaba a tales extremos que

[...] en los dormitorios, de 2 por 3 metros, dormían hasta 25 menores [...] los muchachos que no cabían en los dormitorios dormían sentados en los pasillos o incluso en los cuartos de baño [...] A los reclusos no se les ofrecía ninguna actividad excepto ver la televisión y jugar al fútbol. Ambas se realizaban por turnos. Debido a la dificultad de controlar a grupos tan grandes, los que no estuvieran participando en una de estas actividades debían permanecer sentados en todo momento (ibídem: 7).

Al menos en parte, los malos tratos y la falta de actividades para los jóvenes detenidos es resultado del déficit crónico de personal: 10 ó 15 monitores deben vigilar a 350 detenidos. En abierta contradicción con lo que estipula tanto la CIDN como el Estatuto de Niños y Adolescentes, es común la reclusión de adolescentes en cárceles para adultos así como en nuevos centros de reclusión tipo cárceles de máxima seguridad (ibídem: 7, 17).

6. Los niños y la pena de muerte

En cuanto a la pena de muerte, la CIDN estipula que: “No se impondrá la pena capital [...] por delitos cometidos por menores de 18 años de edad” (CIDN, Art. 37a). Este artículo de la Convención no hace más que repetir el artículo 6 (5) del Pacto Internacional sobre los Derechos Políticos y Civiles del año 1966. Por lo tanto, reproduce una

normativa ya establecida de la protección de los derechos humanos de los jóvenes. Sin embargo, la práctica de las fuerzas de seguridad de muchos países, incluyendo los tres aquí tratados, permite inferir que, de hecho, jóvenes pobres son víctimas de ejecuciones extra-judiciales. Las circunstancias en las que mueren chicos y adolescentes a manos de la policía están bien documentadas y permiten extraer la conclusión de que el uso injustificado del arma de fuego por parte de la policía no configura una excepción, sino un *modus operandi*. Así son frecuentes los casos en que los policías participantes colocan un arma en la mano de la persona asesinada para hacer más plausible la afirmación de que habrían actuado en defensa propia; asimismo se falsifican autopsias tendientes a encubrir el hecho de que la víctima fue asesinada por la espalda; también es común que se destruyan pruebas que incriminarían a los policías implicados y que testigos o parientes de las víctimas que persiguen el esclarecimiento del caso sean amenazados por la policía.⁵ El desprecio por la vida en operaciones policiales tipo comando en barrios marginales, la impunidad casi total que goza la policía gracias a un sistema judicial que suele encubrir los abusos cometidos y la tolerancia de las elites hacia el uso de la fuerza letal por parte de la policía, sugieren una política de limpieza social a fin de exterminar a supuestos elementos peligrosos. La práctica de ejecuciones sumarias no afecta sólo a los niños, pero también los afecta. Según un estudio sobre civiles muertos por la policía del municipio de Río de Janeiro entre enero de 1993 y julio de 1995, la mayoría de las víctimas de la violencia policial eran jóvenes; los grupos de 20-24 y 15-19 años fueron los más afectados (Cano 1997: 60). Una investigación sobre el uso de la fuerza letal en el Gran Buenos Aires muestra un resultado similar: la mayoría de los civiles muertos correspondía a las edades de 19-24 y 13-18 años (CELS 2001: 124). Más notorio aún es el caso de los escuadrones de la muerte en Brasil que asesinaron a chicos de la calle —un fenómeno que según algunos indicios empieza a aparecer también en la Argentina (Alarcón 2001c)—. La violencia policial viene acompañada por una preocupación mediática por la criminalidad así como por un discurso que identifica a los jóvenes pobres como delincuentes violentos y que exige a la policía una “guerra frontal contra la criminalidad” (Stanley 2002).

5 Chevigny (1995); Amnistía Internacional (1997); Cano (1997).

7. Conclusión: determinantes de las violaciones de los derechos de los niños

El análisis comparativo de las violaciones de los derechos del niño en tres países de América Latina sugiere que algunas variables que podrían parecer influyentes, no tienen, sin embargo, un gran impacto sobre el grado de conformidad con los derechos consagrados internacionalmente. Como se ha visto, los tres Estados han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Dos de ellos –Argentina y Brasil– han recuperado el sistema político democrático después de un período o períodos prolongados de gobierno autocrático, marcados por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, mientras que otro –Venezuela– muestra una larga trayectoria democrática. Dos de ellos –Argentina y Venezuela– no han adecuado su legislación nacional a las previsiones de la CIDN, sino que tienen vigente todavía una legislación que refleja la ideología tutelar y el paradigma, superado en el ámbito internacional, de la situación irregular de los niños. En cambio, el Estatuto del Niño y el Adolescente brasileño representa una adecuación ejemplar a la Convención sobre los Derechos del Niño. Por el carácter subterráneo de los abusos aquí documentados, que desde luego no se encuentran registrados en ninguna estadística estatal, no resulta posible cuantificar los abusos de los derechos del niño y, por lo tanto, no se puede averiguar con certeza cuál de los tres países resulta más o menos violador de los derechos del niño. No obstante lo dicho, es posible afirmar categóricamente que las violaciones de los derechos del niño representan en cada uno de los tres Estados una práctica sistemática y habitual que viene acompañada por un discurso legitimador del uso de la violencia hacia los niños desprotegidos. Por lo tanto, tenemos que cuestionar cualquier enfoque explicativo que nos remita a la herencia autoritaria o que coloque el énfasis en la falta de legislación nacional adecuada.

La sistemática violación de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño genera la pregunta acerca de la efectividad de los tratados internacionales como instrumentos protectores de los derechos humanos. Para algunos autores, la falta de sanciones en caso de violaciones graves de los derechos humanos representa una de las fallas decisivas del sistema de protección internacional de los derechos humanos (Farer/Gaer 1993). Sin duda, los

esfuerzos en el marco de la ONU han contribuido más al establecimiento de estándares (*standard setting*) y al monitoreo (*monitoring*) que a la implementación de los derechos humanos (Alston 1992; Donnelly 1998).

Desde un enfoque distinto, Risse/Sikkink (1999) hacen hincapié no tanto en la falta de sanciones, sino en la auto-imagen de los Estados. Según su interpretación, la comunidad de los Estados conforma una sociedad internacional, la cual se define y se constituye a través de valores y normas, y cuyos miembros, los Estados individuales, se adaptan a esas normas por un proceso de socialización. El respeto por los derechos humanos se convierte, según ese modelo, en un elemento constituyente de la pertenencia a la sociedad internacional. En una serie de estudios de caso (Risse/Ropp/Sikkink 1999) se intenta demostrar que los organismos de derechos humanos, sus aliados a nivel internacional y los Estados liberales, pueden presionar a los Estados violadores de dichos derechos para que cambien su comportamiento y lleven a cabo una internalización de las normas internacionales a nivel estatal. Los autores de este modelo, que lo conciben como aporte al enfoque constructivista en la disciplina de las relaciones internacionales, proponen que el fortalecimiento de los derechos humanos sea entendido como un proceso que atraviesa cinco etapas distintas: represión; negación de las violaciones y/o negación del interés legítimo de la comunidad internacional por intervenir en los asuntos internos; concesiones tácticas hacia la coalición pro-derechos humanos (grupos opositores y de derechos humanos en el país violador así como en el extranjero –la “red transnacional”– en coalición con los Estados liberales); anclaje normativo –el reconocimiento, al menos formal, de los derechos humanos (ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos más importantes)–; y, como paso final, un comportamiento conforme a las reglas, o sea, que el Estado previamente violador de los derechos humanos llegue a incorporar su protección no sólo en su legislación sino también en la práctica institucional así como en sus discursos. Cuando se alcanza este último estadio, la idea de los derechos humanos como elemento definitorio de la identidad del Estado está internalizada.

El enfoque de Risse y Sikkink tiene el gran mérito de diferenciarse de algunos análisis ingenuos que a la hora de explicar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ponen el énfasis casi exclusi-

vamente en la falta de sanciones penales internacionales, construyendo así una supuesta, pero errónea, analogía con el derecho penal estatal –errónea porque el comportamiento de los ciudadanos conforme con la ley penal no se debe en general al temor a las penas sino a la internalización de las normas éticas por ella consagradas–. Como ha observado Steinert (1998) en otro contexto, el sistema penal es un instrumento torpe y si tuviéramos que depender de él para garantizar la convivencia respetuosa de la ciudadanía, difícilmente habría sociedades más o menos liberales, tolerantes y pacíficas. El enfoque de Risse y Sikkink reconoce este aspecto: de la internalización de normas éticas se deriva la idea y la práctica de los derechos humanos como elemento fundamental que garantiza su implementación. Sin embargo, su modelo no resulta del todo convincente. Algunos aspectos problemáticos quedan al descubierto a la hora de analizar la no-aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en América Latina.

En primer lugar, cabe cuestionar la supuesta comunidad pro-derechos humanos de los Estados liberales (básicamente, el mundo de la OCDE), ya que el concebir este grupo en su conjunto como defensor y abogado de los derechos humanos ignora tanto las deficiencias notables de ese grupo en cuanto a la defensa de los derechos humanos como las diferencias importantes entre sus miembros en cuanto a los derechos merecedores de protección y los mecanismos para lograrlo –basta recordar las posiciones opuestas de la mayoría de los países del mundo por un lado y Estados Unidos por otro lado frente a la Corte Internacional Penal, o la proscripción de la pena de muerte por los países miembros de la Unión Europea y la actitud tan distinta de Estados Unidos–. En este sentido, es menester recordar que éste es el único país del mundo que no ha firmado ni ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Así, la imaginada comunidad de los países liberales como impulsores de un cuerpo consensuado de derechos humanos dista mucho de la realidad. En segundo lugar, los Estados liberales se muestran mucho más comprometidos con aquellos que son víctimas de una persecución política que con las víctimas más o menos anónimas de la exclusión social, aún cuando se trate de violaciones a los derechos fundamentales.

Como ya hemos mencionado, la Convención sobre los Derechos del Niño goza de un grado de adhesión por parte de los Estados que es mucho mayor que el de cualquier otro tratado internacional sobre de-

rechos humanos. Además, la Convención se basa en esfuerzos internacionales para defender los derechos del niño que se remontan hasta los años veinte del siglo pasado. Mucho más que cualquier otro tratado internacional sobre derechos humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño parece representar un consenso enormemente amplio de la sociedad de los Estados. De ahí que, según el modelo de Risse y Sikkink, se podría esperar una reacción inequívoca de los Estados frente a violaciones masivas de los derechos del niño. Sin embargo, ese no es el caso. Y no se puede explicar la no internalización de las normas de la CIDN como resultado de una falta de seguimiento por parte de los organismos de derechos humanos, tal como sostiene el modelo de Risse y Sikkink, ya que no faltan ni la labor de seguimiento y documentación por parte de grupos locales ni la difusión a nivel mundial por parte de los organismos de derechos humanos de mayor peso en el ámbito internacional, como lo son Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El “anclaje normativo” de los derechos del niño no representa necesariamente un paso previo a la internalización de los derechos humanos, tal como se predica en el modelo de la socialización. Los tres casos aquí presentados revelan claramente que el anclaje normativo –en este caso, la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño– puede ir acompañado tanto de prácticas violadoras de los derechos humanos de los niños como de discursos sobre la peligrosidad de los jóvenes y la delincuencia juvenil que pretenden justificar la violación de “derechos inalienables” (CIDN, Preámbulo).

Las víctimas jóvenes de los abusos del aparato coercitivo del Estado son niños y niñas pobres. Como sus pares adultos, están excluidos de la sociedad por su marginación socioeconómica, exclusión que se refuerza con las prácticas abusivas del Estado y la violación de sus derechos civiles más fundamentales (Stanley 2001). En el contexto de exclusión social producido por el mercado de trabajo en el marco de políticas económicas que acentúan las desigualdades sociales, las políticas de seguridad y las penas que impone el Estado adoptan también un marcado perfil de exclusión: no se trata ya de la integración en la sociedad a través de medidas reeducativas, sino de fijar límites con el objetivo de proteger al resto de la sociedad frente a los excluidos, a los otros. Ya que se ha abandonado la integración como objetivo, se refuerza la prevención, sea usando técnicas de vigilancia y control, o a través de medidas represivas contra grupos que *a priori* se consideran

peligrosos, entre ellos, los jóvenes pobres. La institución de la pena tiene una función legitimadora específica:

la pena incorpora el elemento de justificación del Estado e incluso su obligación de excluir a los portadores de determinadas cualidades. La exclusión a través del crimen y el castigo poseen la característica singular de que son merecidas y, por ende, moralmente justificadas (Steinert 1998: 416).

El discurso acerca del crecimiento amenazante de la criminalidad implica también una polarización –comparable a la propaganda de guerra– entre el “nosotros” y el “ellos”, y consolida así la idea de un conjunto homogéneo, el “nosotros” al que todos los no excluidos pertenecemos, valor inestimable en una sociedad fragmentada (ibidem: 416). Un elemento notable en la construcción discursiva del “otro peligroso” lo constituye la conformidad con las prácticas violentas del aparato coercitivo que manifiestan los pobres, es decir los propios grupos que son blanco predilecto de esa violencia. Pinheiro interpreta ese fenómeno como el intento de demostrar la propia pertenencia a la comunidad por medio del apoyo a las medidas de exclusión (Pinheiro 1997).⁶

El carácter discriminatorio del sistema penal no representa, desde luego, una característica específica de los países latinoamericanos.⁷ Sin embargo, dos aspectos relacionados entre sí conducen, en muchos países de América Latina así como en otras nuevas democracias, a la agudización de las prácticas discriminatorias. Primero, por la debilidad del Estado de derecho, la distancia siempre existente entre la ley y la realidad, entre lo previsto y lo practicado, parece mayor grande que en las democracias establecidas. En segundo lugar, la profunda desigualdad social favorece la persistencia de comportamientos autoritarios y violentos. Como observa O'Donnell, haciéndose eco de Rousseau, a los privilegiados les resulta extremadamente difícil reconocer a “los otros” como sujetos autónomos (O'Donnell 1999: 323). Así, contra la letra y el espíritu de las constituciones democráticas, contra las previsiones de la CIDN, y en el caso de Brasil contra las previsiones del propio Estatuto de Niños y Adolescentes, el trato dado a los chicos pobres por el aparato coercitivo es percibido no como una crisis aguda

6 Véase también Caldeira (1996).

7 Para un análisis acertado de la discriminación sistemática del sistema penal de los Estados Unidos véase Cole (1999).

de derechos humanos, sino como un problema de seguridad pública. En el contexto de una creciente desigualdad socioeconómica y la marginación de sectores cada vez más amplios, los niños pobres son los chivos expiatorios del sistema excluyente. En lugar de un fortalecimiento del Estado de derecho se da un proceso de exclusión y represión con métodos violentos e ilegales, configurándose lo que Wacquant llama el Estado penal (Wacquant 1999). Mientras no haya mejoras sustanciales en la protección y fortalecimiento de los derechos económicos y sociales –derechos que también están consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño– no cabe esperar cambios sustanciales en el tratamiento otorgado a los niños.

¿Significa esa evaluación sobria acerca de la efectividad de la CIDN que el esfuerzo para proteger los derechos humanos a través de tratados internacionales no sirve? Tal sería la conclusión sostenida por la escuela “realista” de la teoría de las relaciones internacionales, y significaría que todos los avances realizados desde 1945 en cuanto a la codificación al nivel internacional de los derechos humanos a los que nos hemos referido brevemente arriba ha sido un ejercicio inútil. Preferimos terminar este análisis, sin embargo, con una perspectiva a largo plazo que permita entender que, si bien la CIDN todavía no ha logrado mejoras significativas en la situación de los niños, sí puede ser vista como un instrumento capaz de tener un impacto positivo.

Como se ha mencionado, el espíritu y la orientación de la Convención representa un cambio paradigmático. Según Méndez, este aspecto diferencia la CIDN de todos los demás instrumentos internacionales de derechos humanos, ya que, en general, los tratados sobre derechos humanos reflejan un consenso sobre ideas y valores que no necesariamente prevalecen en todo el mundo, pero que sí son aceptados y probados en ciertos países o regiones. En cambio, la CIDN puede ser descrita como un modelo “ideal” –no en el sentido de un modelo utópico, no realizable, sino en el sentido de la construcción social de una visión específica de la niñez y la juventud que no puede apoyarse en un modelo existente como paradigma–.⁸ Vista de esa manera, la CIDN

8 En este sentido, cabe advertir que los países desarrollados que se suelen entender como los defensores y pioneros de los derechos humanos tienen grandes dificultades para ajustar su legislación y su práctica a la CIDN y hasta para admitir que tal ajuste es necesario. Como ejemplos de ello, véase para el Reino Unido Franklin (2002) y para la República Federal de Alemania Bethke (1996).

representa un esfuerzo por utilizar el derecho internacional para guiar y formar el desarrollo de la política en cada país, no la codificación de un nivel de protección ya establecido (Méndez 2001). De ahí que podamos concluir que la CIDN, como todo tratado de derechos humanos pero más aún que aquellos que codifican lo ya practicado, debe ser entendida no como un garante de los derechos de los niños, sino sólo como un punto de partida. En este sentido, el modelo de Risse y Sikkink que apunta a los procesos de socialización nos remite también a la posibilidad de utilizar las normas internacionales para concienciar a las sociedades, pues hace falta educar a las administraciones públicas, a los tribunales nacionales y a los propios jóvenes así como impulsar el desarrollo de un discurso que refleje los valores de la CIDN para convertirla en un instrumento eficaz de protección. Y también hace falta un esfuerzo para garantizar los derechos sociales y económicos de los jóvenes que también gozan de protección según la CIDN, ya que, como hemos visto, la violación de los derechos más básicos —el derecho a la vida, la protección de la integridad física— afecta a los chicos más pobres y no es sino una expresión más de su exclusión.

Bibliografía

- Alarcón, Cristian (2001a): "Si hay miseria, que no se note". En: *Página/12*, 31.08.2001.
- (2001b): "A mí la orden me sorprendió". En: *Página/12*, 01.09.2001.
- (2001c): "Informe especial: El asesinato de chicos rateros por el que investigan a un grupo de policías bonaerenses". En: *Página/12*, 06.05.2001.
- Alston, Philip (1992): "Critical Appraisal of the UN Human Rights Regime". En: Alston, Philip (ed.): *The United Nations and Human Rights. A Critical Appraisal*. Oxford: Clarendon Press, pp. 1-21.
- Amnistía Internacional (1997): *Venezuela – The silent cry: gross human rights violations against children*. London: Amnesty International (AMR 53/013/1997).
- (1999): *Brasil: 'Aquí nadie duerme tranquilo'. Violaciones de derechos humanos contra presos*. London: Amnesty International (AMR 19/09/99/s).
- (2000): *Brasil: Vidas perdidas. Centros de reclusión de menores de la FEBEM en São Paulo*. London: Amnesty International (AMR 19/14/00/s).
- Beloff, Mary A. (1997): "La aplicación directa de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en el ámbito interno". En: Abregú, Martín/Courtis, Christian (eds.): *La Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por los Tribunales Locales*. Buenos Aires: CELS, pp. 623-635.

- Bethke, Ralph (1996): *Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes und seine Umsetzung in der Bundesrepublik Deutschland*. München: Utz.
- Bidart Campos, Germán J. (1997): "El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional". En: Abregú, Martín/Courtis, Christian (eds.): *La Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por los Tribunales Locales*. Buenos Aires: CELS, pp. 77-88.
- Caldeira, Teresa P. R. (1996): "Crime and Individual Rights: Reframing the Question of Violence in Latin America". En: Jelin, Elizabeth/Hershberg, Eric (eds.): *Constructing Democracy. Human Rights, Citizenship and Society in Latin America*. Boulder/Oxford: Westview, pp. 197-211.
- Cano, Ignacio (1997): *Letalidade da Ação Policial no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: ISER.
- Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (1999): *Direitos Humanos x Violência Policial*. Rio de Janeiro: CEAP/Fundação Centro de Defesa dos Direitos Humanos Bento Rubião/CDDH-Proyecto Legal/IBISS, MNDH.
- CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) (2001): *Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina*. Buenos Aires: CELS (Catálogos, Siglo Veintiuno).
- Chevigny, Paul (1995): *Edge of the Knife. Police Violence in the Americas*. New York: The New Press.
- Cole, David (1999): *No Equal Justice. Race and Class in the American Criminal Justice System*. New York: The New Press.
- Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (2001): *Archivo de Casos 1983-2001*. Buenos Aires: MS.
- Donnelly, Jack (1998): *International Human Rights*. Boulder/Oxford: Westview.
- Farer, Tom/Gaer, Felice (1993): "The UN and Human Rights: At the End of the Beginning". En: Roberts, Adam/Kingsbury, Benedict (eds.): *United Nations, Divided World. The UN's Roles in International Relations*. Oxford: Clarendon, pp. 240-296.
- Franklin, Bob (ed.) (2002): *The New Handbook of Children's Rights. Comparative Policy and Practice*. London/New York: Routledge.
- García Méndez, Emilio (2001): "From Minors to Citizens: Social Policies for Children within the Context of the Integral Protection Doctrine". En: Bartell, Ernest J./O'Donnell, Alejandro (eds.): *The Child in Latin America. Health, Development, and Rights*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, pp. 251-261.
- Giarone, Daniel (2000): "Torturas a menores: el huevo de la serpiente". En: *En marcha*, 16 (octubre), pp. 22-23.
- Human Rights Watch (1994): *Final Justice. Police and Death Squad Homicides of Adolescents in Brazil*. New York: Human Rights Watch.
- Méndez, Juan E. (2001): "Comments on 'From Minors to Citizens'". En: Bartell, Ernest J./O'Donnell, Alejandro (eds.): *The Child in Latin America. Health, Development, and Rights*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, pp. 263-272.

- Méndez, Juan E./O'Donnell, Guillermo/Pinheiro, Paulo Sérgio (1999): *The (Un)Rule of Law and the Underprivileged in Latin America*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Morales, Nelson et al. (1998): *Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos en Venezuela*. Mérida: Producciones Karol C.A.
- Naciones Unidas (1985): *Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores* ["Reglas de Beijing"], adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985.
- (1989): *Convención sobre los Derechos del Niño*, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.
- O'Donnell, Guillermo (1997): "Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una perspectiva latinoamericana con referencias a países poscomunistas". En: O'Donnell, Guillermo: *Contrapuntos, Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*. Buenos Aires: Paidós, pp. 259-285.
- (1999): "Polyarchies and the (Un)Rule of Law in Latin America: A Partial Conclusion". En: Méndez, Juan E./O'Donnell, Guillermo/Pinheiro, Paulo Sérgio (eds.): *The (Un)Rule of Law and the Underprivileged in Latin America*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, pp. 303-337.
- Pinheiro, Paulo Sérgio (1997): "Popular Responses to State-Sponsored Violence in Brazil". En: Chalmers, Douglas et al. (eds.): *The New Politics of Inequality in Latin America. Rethinking Participation and Representation*. Oxford: Oxford University Press, pp. 261-280.
- Risse, Thomas/Ropp, Stephen C./Sikkink, Kathryn (eds.) (1999): *The Power of Human Rights. International Norms and Domestic Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Risse, Thomas/Sikkink, Kathryn (1999): "The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: Introduction". En: Risse, Thomas/Ropp, Stephen C./Sikkink, Kathryn (eds.): *The Power of Human Rights. International Norms and Domestic Change*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-38.
- Schellinski, Kristina (1998): "Ausbeutung von Kindern – Herausforderung an das gesamte VN-System". En: Baum, Gerhart/Riedel, Else/Schaefer, Michael (eds.): *Menschenrechtsschutz in der Praxis der Vereinten Nationen*. Baden-Baden: Nomos, pp. 139-154.
- Stanley, Ruth (2001): "Violencia policial en el Gran Buenos Aires: ¿Necesita el neoliberalismo una policía brava?". En: Bodemer, Klaus/Kurtenbach, Sabine/Meschkat, Klaus (eds.): *Violencia y Regulación de Conflictos en América Latina*. Caracas: Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina/Fundación Heinrich Böll/Editorial Nueva Sociedad, pp. 237-253.
- (2002): "How Deviant is Deviance? 'Cop Culture', Mainstream Culture and Abuse of Police Power in Buenos Aires". En: Maior, George Cristian/Watts, Larry (eds.): *Globalization of Civil Military Relations: Democratization, Reform and Security*. Bucarest: Enciclopedica Publishing House, pp. 432-456.
- Steinert, Heinz (1998): "Ideology with Human Victims: The Institution of 'Crime and Punishment' between Social Control and Social Exclusion: Historical and Theoretical Issues". En: Ruggiero, Vincenzo/South, Nigel/Taylor, Ian (eds.): *The New*

European Criminology. Crime and Social Order in Europe. London/New York: Routledge, pp. 405-424.

Verbitsky, Horacio (2000): "Una sórdida rutina". En: *Página/12*, 23.04.2000.

— (2001): "Picana y mano dura". En: *Página/12*, 12.08.2001.

Volpi, Mario/Costa Saraiva, João Batista (1998): *Os Adolescentes e a Lei*. San José: Programa Sistema Penal y Derechos Humanos—ILANUD/Comisión Europea.

Wacquant, Loic (1999): *Les prisons de la misère*. Paris: Seuil.